

trar en el detalle de la interesante discusión sobre las transformaciones acaecidas, por ejemplo, en el sistema de educación primario y medio —sobre todo a raíz de la municipalización de la escuela y de la secuela de problemas que esto trae—, o en el empleo y el actual sistema de capacitación laboral. Tampoco se dará cuenta de los análisis sobre el déficit de viviendas y los planes habitacionales o sobre el sistema de salud en gran medida privatizado, y que deja en la práctica a la gran mayoría de los pobres sin atención médica curativa y previsional oportuna y eficaz, mientras que los sectores de altos ingresos gozan hoy de una oferta de excelentes servicios médicos.

Lo que conviene subrayar aquí es la abundancia de estudios técnicos de buen nivel sobre la extrema pobreza en las áreas mencionadas y sobre las ventajas o desventajas de las políticas gubernamentales sectoriales. Estos estudios no provienen sólo de fuentes oficiales, sino de universidades y, en mayor número, de centros de investigación paralelos y de Organizaciones no gubernamentales (ONG) que han surgido durante los quince años del presente gobierno. Hay que señalar también que en los talleres tomaron parte funcionarios que se sometían a la crítica y esto daba lugar a un diálogo sobre las soluciones a futuro, que difícilmente se hubiera logrado unos años atrás. Por último, conviene resaltar la casi total ausencia de representantes de organizaciones gremiales, sociales y culturales de los mismos pobres, que no siempre están desorganiza-

Foro:

Desarrollo y equidad

GONZALO ARROYO. S.J.

Del 7 al 19 de agosto se desarrolló en Santiago el seminario "El desafío de la equidad"¹. La actividad se organizó en talleres de trabajo y conferencias seguidas de paneles o mesas redondas.

Los talleres de trabajo discutieron sobre las formas de

combatir la extrema pobreza durante el período democrático que se avecina, y participaron en ellos especialistas, tanto de origen académico como de gobierno en los temas de salud, educación y vivienda para los sectores postergados. No es nuestro ánimo en-

1. Seminario organizado conjuntamente por el Programa de Postgrado en Economía ILA-DES-Georgetown University, el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y UNICEF.

dos pese a los obstáculos ingentes encontrados en estos años.

Las **conferencias**, y en especial los **paneles**, en que participaban académicos de renombre y funcionarios destacados del gobierno militar, dieron lugar a un interesante intercambio en que lo técnico se entretreía con las proposiciones políticas sustentadas por las dos grandes corrientes cuyas fuerzas se medirán en las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre². El primer panel, que enfrentó a tres economistas y ex-ministros de Allende, Pinochet y Frei respectivamente, como son Sergio Bitar (PPD), Fernando Léniz (independiente que apoya a Büchi) y Sergio Molina (DC), dio una pauta para las posteriores discusiones: reconocimiento de la urgencia de solucionar el problema de la pobreza, coincidencia gruesa sobre la necesidad de una acción estatal, aunque ciertas divergencias sobre el monto del gasto social y las formas de aumentar los recursos, los plazos y las modalidades de aplicación de los programas orientados a combatir la extrema pobreza.

La socióloga Patricia Matte, alta funcionaria gubernamental, explicó en líneas generales la estrategia de ordenamiento y modernización con crecimiento económico aplicada por el gobierno militar, y más específicamente las políticas de reorientación del gasto social, que utilizan la técnica de "focalización" del mismo hacia los más pobres, y la necesidad de diseñar políticas sociales y mantenerlas en el largo plazo (ver su artículo en este informe). El panel que siguió reunió a dos economistas de la Concertación, José Pablo Arellano (CIEPLAN) y Alvaro García (PRE-ALC), y a Luis Larraín, actualmente Director de ODEPLAN. El primero, después de criticar

ciertas políticas económicas y sociales del Gobierno militar, presentó la propuesta de la Concertación de aumentar el gasto social —de manera compatible con el crecimiento económico— y, además, de practicar otro estilo de gobierno cuyo eje es la participación de los sectores postergados en la toma de decisiones gubernamentales, efectivamente descentralizadas, promoviendo la organización de la solidaridad desde la base. Alvaro García mencionó tres instrumentos específicos: el cambio de legislación laboral; la eficiencia en el uso de subsidios y, finalmente, la creación de un Fondo de Solidaridad e Inversión Social para dar una alta prioridad, dentro de la acción de gobierno, a la erradicación del desempleo y la extrema pobreza (Ver artículo del autor en este informe). Finalmente, Luis Larraín explicó la organización actual de los programas asistenciales "focalizados" para paliar la extrema pobreza, recordando además que la política social no abarca sólo los sectores más desposeídos sino también otros sectores sociales. Puntualizó que corresponde a la acción pública orientarse hacia los servicios sociales y no tanto a los sectores productivos y que su límite reside en que los recursos asignados al gasto social no deben afectar la inversión pública y privada.

Financiamiento del gasto social

Hasta aquí la discusión se había mantenido dentro de cierto consenso respecto a la prioridad a dar la lucha contra la pobreza, que se reconocía como tarea de todos, aunque había diferencias respecto de los instrumentos a utilizar y las formas de participación de los beneficiarios, de las organizaciones y de las distintas instancias gubernamentales

en la definición de las políticas. Sin embargo, el tono de la discusión subió y se marcaron divergencias políticas más claras en el panel sobre las fuentes de financiamiento del gasto social y, en particular, sobre el alza de impuesto que la Concertación propone para cumplir la meta de elevar el gasto social en un 4 por ciento, en el lapso de cuatro años, dentro del presupuesto fiscal. El economista en la línea de la Concertación, Andrés Sanfuentes (ILADES-Georgetown University) señaló que las "políticas del chorro" son erróneas (porque el desarrollo no supone sólo crecimiento económico sino también nuevas relaciones distributivas) y se requiere concentrar recursos hacia los programas de pobreza: si el país crece en 5 por ciento anual, sólo se puede asignar de un 1.25 a 1.5 por ciento a los sectores más postergados; una segunda fuente es la reducción de otros componentes del gasto social y después de estos años de política neoliberal quedaría poco por recortar. De este modo, el incremento del gasto social exige nuevos ingresos del gobierno futuro los que de hecho no se podrían obtener, ni contrayendo más deuda interna o externa, ni menos aun emitiendo dinero que repercutiría en incremento de la inflación. La única vía posible sería entonces el aumento de la tributación, no tanto a través de impuestos indirectos (IVA), sino mediante un alza a los impuestos a la renta de los grupos de altos ingresos, y a los impuestos a las utilidades de las empresas. Manuel Marfán (CIEPLAN) afirmó que estos últimos habrían bajado desde la reforma de 1988 (no se paga impuesto por utilidades rein-

2. Por falta de espacio otros temas tratados no pudieron ser reseñados aquí, por ejemplo los aspectos políticos de la transición hacia la democracia.

